

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

ANTECEDENTES:

I. Solicitud de Información. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, se recibieron las solicitudes de información a través del Sistema Nacional de Transparencia, a las que le fue asignado el folio número 080144524000362, mediante la cual se requirió:

“¿El Juez Erwin Enrique Epaminondas Cuervo Zaragoza ha recibido quejas formales por parte de los actores sobre sus decisiones judiciales?”

¿Ha sido el Juez Erwin Enrique Epaminondas Cuervo Zaragoza objeto de alguna investigación por parte del Consejo de la Judicatura?

¿El Juez Erwin Enrique Epaminondas Cuervo Zaragoza ha sido acusado de parcialidad en algún juicio?”

II. Requerimiento de información. A través del oficio identificado con el número UT-750-2024, el Titular de la Unidad de Transparencia solicitó a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas diera respuesta, sobre los planteamientos que correspondieran a esa Dirección y, en su caso, indicara si la información requerida encuadraba en alguna de las hipótesis establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chihuahua para ser considerada como reservada, confidencial o inexistente.

III. Respuesta al requerimiento: En atención a lo anterior, el titular del área requerida, envió el oficio identificado con el número **UIRA 1198/2024** en el que indicó que no es posible dar respuesta en específico acerca de los movimientos o razones de las denuncias presentadas en contra del servidor público en virtud de que es parte de una investigación en donde se está recabando información, por lo tanto se encuentra clasificada como reservada, lo anterior con fundamento en el artículo 124 fracción VIII, IX, X y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

CONSIDERANDO:

I. Competencia. El Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, es competente para conocer y resolver sobre los procedimientos de clasificación de información; ello, de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y 36, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, los Lineamientos

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 148, 149 y 150 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

II. Análisis de fondo. Del análisis de la clasificación de información como reservada, realizada por la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, encuadrada en la fracción VIII, IX, X Y XII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, la materia de estudio se constriñe en confirmar, modificar o revocar la determinación hecha por el área requerida, en términos de lo establecido en las fracciones III, VI y VIII del artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, de conformidad con lo que dispone el artículo 2 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, sólo en los casos previstos en la ley, se limitará el acceso a la información pública.

En este orden de ideas, debe decirse que, en el esquema de nuestro sistema constitucional, el derecho de acceso a la información se encuentra establecido en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual todo acto de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible por todos.

Sin embargo el derecho de acceso a la información no puede caracterizarse como de contenido absoluto, ya que su ejercicio está acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes ¹ en atención al dispositivo constitucional antes citado, el cual señala que la información que se tiene bajo resguardo de los sujetos obligados del Estado, encuentra como excepción aquélla que sea temporalmente **reservada** o confidencial, en los términos establecidos por el legislador federal o local, por lo que toda persona podrá acceder a la información pública materia de la Ley salvo los casos de excepción previstos en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

¹ **DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.**

El **derecho** a la **información** consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto **tanto** a los **intereses** de la **sociedad** como a los **derechos** de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de **información** que se conoce en la doctrina como "reserva de **información**" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos **intereses**, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado **derecho** no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su **ejercicio encuentra** excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la **información** en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los **intereses nacionales** y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el **derecho** a la vida o a la privacidad de los gobernados. Época: Novena Época. Registro: 191967. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta.

de Chihuahua, en el cual prevé los supuestos bajo los cuales se podrá clasificar la información como reservada.

III. Análisis específico de la prueba de daño. En ese sentido se considera, que, si bien es cierto que la regla de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información no es absoluta, existen excepciones tratándose del interés público o general, porque, como se mencionó anteriormente, se enumeran los supuestos a través de los cuales los sujetos obligados podrán clasificar aquella información como reservada, misma que se podrá sustraer por un tiempo determinado.

Por lo tanto, este Comité estima que la clasificación antes mencionada, deberá de ajustarse conforme a lo establecido en los artículos 111 y 112 de la ley local en la materia, esto a través de un análisis casuístico.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua respecto a que los Lineamientos Generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, y para la Elaboración de Versiones Públicas, serán de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados, para el caso en concreto son aplicables los numerales Vigésimo Sexto, Vigésimo Noveno, Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

En lo que respecta a la información solicitada es parte de una o más investigaciones en donde se está recabando información para el esclarecimiento de hechos denunciados ante esta unidad de investigación, es que no es posible proporcionar información; lo mismo ocurre con aquellas investigaciones en las cuales se dictamino el archivo de las mismas puesto que aún no ha transcurrido el plazo necesario para que las mismas sean declaradas firmes.

En el caso concreto, la titular de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado, reserva temporalmente el contenido de los datos mencionados con antelación, dado que se actualizan las fracciones, VII, IX, X y XII del Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, ya la reserva tiene la finalidad de proteger un asunto de interés general, el cual puede verse dañado a través de la divulgación de la información, pues en atención a lo establecido en el artículo

3 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, el Estado debe garantizar la protección de los datos personales.

Ahora bien, el resguardar la información que pudiera obrar en los documentos de la Unidad atiende a la finalidad de proteger un interés general y de esta manera, el no comprometer la información contenida en dichos expedientes, lo cual es preponderante al derecho de acceso a la información, ya que, de divulgarse la información antes de su conclusión, se ocasionaría previsiblemente un daño mayor al bien que con su difusión se procura, en el contexto de un expediente que se encuentra en formación y tramite por lo tanto no han causado estado y, es susceptible de reserva.

Por lo anterior y al actualizarse las hipótesis establecidas en las fracciones VII, IX, X y XII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

En ese orden de ideas, se determina confirmar la reserva temporal, solicitada por la Unidad antes mencionada, que hace alusión en su oficio, hasta que en tanto el proceso judicial haya finalizado, lo que, en su caso, exigirá de una valoración particular sobre la información confidencial que, en su caso, contenga y la necesidad de generar alguna versión pública.

Lo anterior cobra sustento en lo establecido en los diversos cuerpos normativos, señalados en los artículos quinto, octavo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, y trigésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, el cual establece que se podrá considerar información reservada aquella que de divulgarse afecte el debido proceso seguido en forma de juicio, **en tanto no hayan causado estado.**

Ahora bien, por lo que hace a la temporalidad de la reserva, se tiene que, corresponde a tres años, lo cual se estima congruente, por lo que en este caso se deben de aplicar como término para la reserva en los términos del artículo 113, fracción I de la ley local de la materia, se determina que la reserva temporal de la información, será pública cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el plazo de reserva, **salvo la necesidad de realizar una versión pública de los datos personales,**

una vez que cause estado y se llegué a emitir una resolución. Por lo expuesto y fundamentado; se

RESUELVE:

ÚNICO: Se confirma la clasificación de información reservada de manera temporal determinada por la titular de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado, hasta que se extingan las causas que dieron origen a la clasificación de reserva.

Notifíquese e instrúyase a la Unidad de Transparencia para que de inmediato dé cumplimiento a esta determinación y se notifique a la solicitante.

Así, por unanimidad, lo resolvió el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, integrado por la licenciada Ana Gabriela Holguín Castruita, el licenciado Julio César Santacruz Favela y el licenciado Paúl Daniel Moriel Quiralte.



**LICENCIADA ANA GABRIELA HOLGUÍN CASTRUITA
PRESIDENTA DEL COMITÉ**



**LICENCIADO JULIO CÉSAR SANTACRUZ FAVELA
SECRETARIO DEL COMITÉ**



**LICENCIADO PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE
VOCAL DEL COMITÉ**